Proyecto de Resolución Legislativa N° 6359/2020-PE

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
05 OCT 2020
RECIBIDO
Firma ... Hora 16:35

Proyecto de Resolución Legislativa N° 246/2021-PE

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

Lima, 02 de octubre de 2020

OFICIO N° 209-2020 -PR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
16 SEP 2021
RECIBIDO
Firma ... Hora 7:10 p.m.

Señor
MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República
Presente.-

Nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, de conformidad con lo estipulado en los artículos 56° y 102°.3 de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Resolución Legislativa que aprueba el "**Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana**", suscrito el 18 de marzo de 2019 en la ciudad de Lima, República del Perú.

Con tal finalidad, acompañamos el expediente de sustento del aludido Tratado, que atiende los requisitos dispuestos en los artículos 75° y 76°.1.f) del Reglamento del Congreso de la República.

Atentamente,

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARIO JUVENAL LÓPEZ CHÁVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 08 de OCTUBRE del 2020

Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la República: pase la Proposición N° 6359 para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de RELACIONES EXTERIORES

.....

.....

.....

JAVIER ANGELES ILLMANN
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PERÚ
CONGRESO de la REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, **17** de **setiembre** del **2021**

De conformidad con el acuerdo 019-2021-2022/CONSEJO-CR, de fecha 17 de agosto de 2021, pase el Proyecto de Resolución Legislativa N° 6359/2020-PE, a la comisión (es) de**; Relaciones Exteriores;** asignándole el **Nª 246/2021-PE,** para continuar su trámite desde el estado procesal en el que se encontraba al término del período parlamentario 2016-2021.

HUGO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Carpeta de perfeccionamiento del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana

1. **Proyecto de Resolución Legislativa**

2. **Resolución Suprema**

3. **Informe (DGT) N° 047-2019 del 20 de agosto de 2019**

4. **Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana**

5. **Solicitud de Perfeccionamiento**
   - **Memorándum (CCA) N° CCA00019/2019 del 19 de marzo de 2019**

6. **Opiniones**
   - **Memorándum (LEG) N° LEG00842/2019 del 13 de junio de 2019**
   - **Informe N° 007/2019 del 4 junio de 2019 de la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre asuntos de Derecho Penal Internacional**
   - **Memorándum (CCA) N° CCA00022/2019 del 27 de marzo de 2019**

Proyecto de

Resolución Legislativa

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa

Apruébase el Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana, suscrito el 18 de marzo de 2019 en la ciudad de Lima, República del Perú.

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER ROGER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros

MARIO JUVENAL LÓPEZ CHÁVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

Resolución Suprema Nº 097-2020-RE

Lima, 30 de setiembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que el **"Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana"** fue suscrito el 18 de marzo de 2019 en la ciudad de Lima, República del Perú;

Que es conveniente a los intereses del Perú la aprobación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56º y 102º inciso 3 de la Constitución Política del Perú; y, el primer párrafo del artículo 2º de la Ley N° 26647, que disponen la aprobación legislativa de los Tratados celebrados por el Estado peruano;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Remítase al Congreso de la República, la documentación relativa al **"Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana"** suscrito el 18 de marzo de 2019 en la ciudad de Lima, República del Perú.

Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el señor Presidente del Consejo de Ministros y el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS · OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros

MARIO LÓPEZ CHÁVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

Manuel Mundaca Peñaranda
Primer Secretario
Despacho Ministerial

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Registrado en la Fecha
30 SEP 2020
RS No. 097 / RE

INFORME (DGT) Nº 047 – 2019

I. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO

1. Mediante memorándum CCA00019/2019 del 19 de marzo de 2019, la Dirección de Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó el inicio del procedimiento de perfeccionamiento interno del **"Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana"** (en adelante, el Tratado), suscrito el 18 de marzo de 2019 en la ciudad de Lima, República del Perú.

II. ANTECEDENTES

Comisión Intersectorial de Negociación

2. La negociación de tratados sobre asuntos de derecho penal internacional referido a extradición -además de los de asistencia judicial en materia penal y transferencia de sentenciados - la lleva a cabo la *'Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana y conducir la negociación de Proyectos de tratados a celebrarse con otros Estados sobre asuntos de Derecho Penal Internacional"*, en adelante, la Comisión Intersectorial, creada en virtud de la Resolución Suprema N° 473-90-RE del 5 de octubre de 1990, cuyo carácter permanente le fue otorgado por Resolución Suprema N° 397-93-RE, de diciembre de 1993, modificada por la Resolución Suprema N° 238-96-RE, de junio de 1996.

3. La citada Comisión Intersectorial está encargada de examinar, preparar la posición peruana y conducir la negociación de los proyectos de tratados antes mencionados, y está conformada por representantes de todas las entidades gubernamentales competentes: el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Negociación

4. La negociación del Tratado se inició en el año 2009, a propuesta del Perú, con la intención de armonizar la legislación de ambos países, en relación con el proceso de extradición, extendiéndose hasta el año 2017, cuando las autoridades dominicanas aceptaron las propuestas finales que remitiera la parte peruana.

5. El Tratado se firmó en Lima el 18 de marzo de 2019 en el marco de la III Reunión del Mecanismo de Consultas Diplomáticas Perú-República Dominicana. En dicho acto participó, a nombre del Estado peruano, el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolizio Bardales, quien en virtud a su alta investidura y conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, puede realizar todo acto relativo a la celebración de los tratados sin que sea necesario acreditar Plenos Poderes[1]. En el mismo sentido, el Decreto Supremo Nº 031-2007-RE, que adecúa las normas nacionales sobre el otorgamiento de plenos poderes al derecho internacional contemporáneo, reconoce

REPÚBLICA DEL PERÚ · Dirección General de Tratados · F.L.D.F. · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Dirección General de Tratados · V.°B.° · Ministerio de Relaciones Exteriores

[1] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, art. 7.2 *"En virtud a sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado (…)"* (subrayado agregado).

que el Ministro de Relaciones Exteriores puede firmar tratados sin que requiera de Plenos Poderes[2].

6. El Tratado se encuentra registrado en el Archivo Nacional de Tratados *"Embajador Juan Miguel Bákula Patiño"* con el código BI.DO.02.2019.

III. OBJETO

7. El Tratado fue concebido en veinticinco artículos, además del Preámbulo. Como su propio título lo evidencia, la República del Perú y la República Dominicana buscan establecer un mecanismo bilateral de extradición. Debe anotarse que el referido instrumento no contiene documentos conexos.

IV. DESCRIPCIÓN

Preámbulo:

8. El Preámbulo, como parte integrante de los tratados, tiene singular importancia dado que en él constan los motivos que llevaron a las Partes a negociar y, finalmente, a concluir un instrumento de esta naturaleza. De esta manera, el Preámbulo cumplirá un rol trascendental para la interpretación de las estipulaciones del Tratado.

9. Una primera consideración que se plantea en el Preámbulo es el deseo de fortalecer los vínculos de amistad que existen entre los pueblos peruano y dominicano.

10. La segunda consideración resalta la importancia del Tratado como un instrumento que permitirá reforzar las capacidades comunes de ambos países en la lucha y prevención contra la delincuencia.

11. La tercera consideración denota que ambos países conciben al Tratado como una herramienta que permitirá la efectiva lucha contra la delincuencia internacional.

12. En tal virtud, toda disposición del Tratado deberá ser interpretada conforme a ese sentido.

Cuerpo principal:

13. El objeto del Tratado es establecer el régimen de extradición recíproca entre ambas Partes, de las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas por las autoridades judiciales de la Parte Requirente por un delito que dé lugar a la extradición (art. 1).

14. Los delitos que darán lugar a la extradición deberán tener una pena privativa de libertad u otra clase de pena o medida de seguridad igual o superior a los dos años. Para el caso de la ejecución de una condena, la pena privativa de libertad que reste por cumplir deberá ser de 6 meses o más (art. 2, num. 1 y 2).

15. El Tratado estipula que procederá la extradición aun cuando la calificación y sanción de los hechos u omisiones que sirven para sustentarla no resulten recíprocamente idénticas en los sistemas jurídicos de las Partes (art. 2, num 3); asimismo, si tal solicitud estuviere referida a delitos punibles conforme a la legislación de las Partes, pero algunos no cumplen las condiciones previstas en los párrafos 1 y 2, la Parte Requerida

---

[2] D.S. N° 031-2007-RE, art. 2: *"El otorgamiento de plenos poderes es indispensable para que un representante del Estado Peruano suscriba un tratado, salvo el caso del Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, quienes de conformidad con el Derecho Internacional, no requieren plenos poderes (...)".*

podrá conceder la extradición para el procesamiento o sanción de la totalidad de tales delitos (art. 2, num. 4).

16. Asimismo, en materia tributaria y aduanera, no podrá denegarse la extradición si la legislación de la Parte Requerida no establece el mismo tipo de impuesto o tasa, o no contenga el mismo tipo de reglamentación en estas materias que la legislación de la Parte requirente, si los hechos reúnen los requisitos del presente artículo (art. 2, num. 5).

17. Por otro lado, el Tratado contempla determinados supuestos en los que obligatoriamente las Partes deben denegar la extradición (art. 3).

18. Algunos de los supuestos de denegación obligatoria de la extradición guardan vinculación evidente con los derechos humanos, pues estos responden a las garantías que emanan de la dignidad de las personas, como, por ejemplo, en el caso que la petición se refiera a delitos considerados por la Parte Requerida como delitos políticos o previstos en la legislación militar que no estén tipificados en la legislación penal ordinaria (art. 3, lit. b); cuando la Parte Requerida tiene motivos fundados para considerar que se solicita la extradición de una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, o que la situación de esa persona pueda resultar perjudicada por alguna de esas razones (art. 3, lit. c); si la persona cuya extradición se solicita ha sido o deba ser juzgada en la Parte requirente por un tribunal de excepción (art. 3, lit. e); si la persona cuya extradición se solicita ha sido beneficiada por una amnistía, indulto o conmutación de pena en el territorio de la Parte requerida o de un tercer Estado respecto del delito en que se fundamenta la solicitud de extradición (art. 3, lit. f); si la acción penal o la pena estuvieren prescritas conforme a la legislación de la Parte Requirente (art. 3, lit. g), entre otros. Es necesario subrayar que los derechos protegidos por dichos supuestos guardan coherencia y ya son considerados como derechos fundamentales por la Constitución Política[3].

19. El Tratado estipula que la extradición será denegada si el delito por el cual se solicita tuviere prevista la pena de muerte en la legislación de la Parte Requirente, salvo que ésta otorgue las garantías suficientes de que dicha pena no se requerirá, no se dictará, ni se ejecutará (art. 5).

20. Conviene referir que si bien el artículo 140° de la Constitución Política del Perú contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte a los delitos de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada, esta pena no está establecida en las normas penales que tipifican dichos delitos, por lo que este tipo de sanción no se aplicaría de manera efectiva en nuestro país.

21. Cabe anotar que el Tratado prevé que no podrá denegarse la extradición ni la entrega por razón que el reclamado sea nacional de la Parte Requerida (art. 4).

22. El Tratado prevé que la Parte Requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada, en tanto se presente la solicitud de extradición (art. 7, num. 1) y señala lo que debe contener la solicitud de detención preventiva, la cual deberá ser presentada por escrito (art. 7, num. 2).

REPÚBLICA DEL PERÚ - Dirección General de Tratados - F.L.D.F. - Ministerio de Relaciones Exteriores -

---

[3] Constitución Política, art. 37: *"(…) No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza. Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo"*. Art. 139: *"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. (…) Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. (…)"*.

REPÚBLICA DEL PERÚ - Dirección General de Tratados - A.V. - Ministerio de Relaciones Exteriores -

23. Asimismo, se indica que, a la recepción de la solicitud de detención, la Parte Requerida dará trámite de conformidad con su legislación (art. 7, num. 3) y que la persona detenida preventivamente será puesta en libertad si la Parte Requerida, vencido el plazo de 60 días consecutivos a partir de la fecha en que ocurrió la detención, no hubiera recibido la solicitud de extradición (art. 7, num. 4), sin perjuicio de que pueda ser nuevamente detenida y su extradición concedida, en caso se reciba posteriormente la correspondiente solicitud (art. 7, num. 5).

24. El Tratado precisa que la solicitud de extradición deberá ser formulada por escrito y remitida por vía diplomática (art. 6, num. 1), y deberá contener los documentos, declaraciones u otro tipo de información que permitan determinar la identidad y el probable paradero de la persona reclamada (art. 6, num. 2, lit. a); la exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición (art. 6, num. 2, lit. b); el texto de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición y las penas correspondientes (art. 6, num. 2, lit. c); el razonamiento jurídico que indique las razones por las cuales la acción penal o ejecución de la pena no ha prescrito (art. 6, num. 2, lit. d); y los documentos, declaraciones u otro tipo de información especificada en los párrafos 3 y 4 del artículo en comentario, según corresponda (art. 6, num. 2, lit. e).

25. En esa perspectiva, cuando la solicitud de extradición esté referida a una persona reclamada para ser procesada por un delito, deberá ir acompañada del original o copia de la orden de detención dictada por autoridad judicial competente, así como la prueba necesaria que establezca indicios suficientes de la comisión del hecho delictuoso y la participación de dicha persona en los hechos u omisiones penales que se le imputan (art. 6, num. 3).

26. En caso que la solicitud de extradición se refiere a una persona condenada, se deberá acompañar un ejemplar del fallo condenatorio (art. 6, num 4, lit. a) y la declaración de la autoridad competente mediante la cual establezca la duración de la pena privativa de libertad a la que será concretamente sometida la persona reclamada (art. 6, num. 4, lit. b).

27. El Tratado establece que si la Parte requerida solicita información o documentos adicionales para decidir acerca del curso que dará a la extradición, dicha información o documentos deberán presentarse en un plazo máximo de 45 días calendario contados desde la fecha en que la Parte Requirente haya sido informada de tal necesidad (art. 6, num. 5).

28. Cabe mencionar que el Tratado estipula que la solicitud de extradición, así como los documentos que la acompañan o la complementen posteriormente, estarán exentos de legalización o formalidad análoga (art. 6, num. 2)

29. El Tratado estipula que la Parte Requerida deberá comunicar a la Parte Requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición (art. 8, num. 1), que, en caso sea denegatoria, deberá suministrarse copia de la decisión pronunciada en ese sentido por la autoridad competente (art. 8, num. 5).

30. Cuando se haya otorgado la extradición, la Partes acordarán el lugar y la fecha de entrega de la persona reclamada, y la Parte Requerida certificará a la Parte Requirente la duración de la detención que esta haya cumplido con motivo de su extradición (art. 8, num. 2). Si la persona reclamada no es recibida en el plazo de 45 días, contados a partir de la fecha convenida para la entrega, ésta será puesta en libertad, pudiendo la Parte Requerida denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos (art. 8, num. 3). En caso de fuerza mayor que impidiera la entrega o recepción de la persona por extraditar, la Parte afectada informará a la otra Parte tal circunstancia y ambas Partes acordarán una nueva fecha para la entrega (art. 8, num. 4).

31. El Tratado señala que luego de haber aceptado la extradición, la Parte Requerida podrá diferir la entrega de la persona condenada hasta la conclusión del proceso penal o cumplimiento de la condena a que esa persona se encontrase sometida en su territorio, para lo cual deberá informar ello a la Parte Requirente, a fin que ambas Partes coordinen oportunamente la fecha y lugar de la ejecución concreta de la extradición (art. 9, num. 1) o, en casos excepcionales, podrá entregar a la persona extraditada temporalmente, a condición de que dicha persona le sea devuelta en los términos particularmente acordados por ambas Partes, para el caso (art. 9, num. 2).

32. En caso la Parte Requerida reciba de manera concurrente solicitudes de la otra Parte y de terceros Estados para la extradición de la misma persona, sea por el mismo delito o delitos distintos, la Parte requerida decidirá a qué Estado entregará a esa persona tomando en consideración factores relevantes, tales como: (a) si las solicitudes fueron realizadas con arreglo a un instrumento jurídico internacionalmente vinculante ; (b) el orden cronológico en que las solicitudes fueron recibidas; (c) el lugar donde se cometió cada delito; (d) el lugar donde se encuentre la víctima; (e) la gravedad de cada delito; (f) la nacionalidad y el domicilio de la persona reclamada; y (g) la posibilidad de una extradición posterior hacia otro Estado (art. 10).

33. Asimismo, el Tratado prevé que la Parte Requerida podrá incautar y entregar a la Parte Requirente los objetos, documentos e información probatoria concernientes al delito por el cual se solicita la extradición (art. 11, num. 1), pudiendo la Parte Requerida aplazar la entrega de dichos bienes por el tiempo que considere necesario para una investigación o proceso penal que esté llevando a cabo en su territorio, o entregarlos a la Parte Requirente, a condición que le sean devueltos a la brevedad posible (art. 11, num. 2), debiendo hacerse tal incautación bajo reserva de los derechos de la Parte Requerida y/o de los terceros adquirientes de buena fe de tales bienes (art. 11, num. 3).

34. Si la persona reclamada consintiere libre, expresa y voluntariamente en ser entregada a la Parte Requirente, la Parte Requerida resolverá su entrega a la brevedad posible, de conformidad con su legislación interna y después de que la persona reclamada haya sido informada de sus derechos y de las consecuencias de su decisión (art. 14).

35. El Tratado dispone que la persona extraditada no podrá ser procesada, juzgada ni detenida en la Parte Requirente, ni sometida a otra restricción de su libertad individual por cualquier hecho anterior a la entrega, a menos que la Parte que la ha entregado haya dado su consentimiento o si la persona extraditada, encontrándose en la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte a la que fue entregada, no lo ha hecho dentro del plazo de 30 días consecutivos posteriores a su liberación definitiva, o retorna voluntariamente a dicho territorio luego de haberlo abandonado (art. 12, num. 1).

36. Asimismo, se prevé que cuando la calificación legal del delito por el cual una persona ha sido extraditada se modifica en el curso del procedimiento, sólo podrá ser procesada o juzgada si la nueva calificación puede dar lugar a extradición en las condiciones del Tratado, se refiere a los mismos hechos por los cuales la extradición fue concedida y no se castiga con pena de muerte en el Estado Requirente, salvo que se otorgue las garantías previstas en el artículo 5 del Tratado (art. 12, num. 2).

37. El Tratado señala que no se podrá conceder la reextradición a un tercer Estado sin el consentimiento del Estado Requerido que haya concedido la extradición, el cual podrá exigir la presentación de los documentos previstos en el artículo 6, así como un acta judicial en la que conste que la persona reclamada acepta la reextradición o que se opone a ella (art. 13).

38. El Tratado prevé que la Parte Requerida autorizará a la Parte Requirente el tránsito por su territorio de las personas que les hayan sido entregadas en extradición por

terceros Estados (art. 15, num. 1), y que no se requerirá autorización para transitar cuando la Parte que traslada a la persona extraditable utiliza transporte aéreo y no tiene la necesidad de aterrizar en el territorio de la otra Parte (art. 15, num 5). Asimismo, establece que en caso ocurriera un aterrizaje no programado, la Parte en cuyo territorio ocurra dicho aterrizaje puede requerir una solicitud de tránsito y puede mantener en estado de detención bajo su custodia a la persona transportada hasta que reciba tal solicitud y el traslado continúe. A tal efecto, se indica que la solicitud de tránsito debe ser planteada en el término de hasta las 96 horas siguientes al aterrizaje no programado (art. 15, num. 6).

39. Con relación a los gastos, el Tratado estipula que la Parte Requerida se hará cargo de los gastos ocasionados por los procedimientos internos inherentes a la extradición, con excepción de los relativos al transporte de la persona extraditada hacia el territorio de la Parte Requirente, que serán cubiertas por esta última (art. 17, num. 1); y que las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones a las cuales se sujetará la ejecución de la solicitud de extradición, en caso sea necesario incurrir en gastos extraordinarios para cumplirla (art. 17, num. 2).

40. Asimismo, las Partes acordaron que las disposiciones del Tratado no afectarán los derechos ni las obligaciones que estas hayan contraído en otros instrumentos internacionales con anterioridad a la conclusión del Tratado (art. 18).

41. Con relación a las Autoridades Centrales, se designa al Ministerio Público – Fiscalía de la Nación y a la Procuraduría General de la República como autoridades centrales del Perú y República Dominicana, respectivamente (art. 19, num. 1) y, cualquier modificación que afecte tal designación se pondrá en conocimiento de la otra Parte por vía diplomática (art. 19, num. 5).

42. En virtud del Tratado, las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí (art. 19, num. 3); y podrán consultarse mutuamente con relación a la tramitación de los casos, así como el mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos para su implementación (art. 19, num. 4).

Disposiciones finales:

43. Las Partes acordaron que cualquier controversia que surja entre ellas, relacionada con la interpretación o ejecución del Tratado, será resuelta mediante consultas por la vía diplomática (art. 20).

44. La cláusula de entrada en vigor prevista en el Tratado guarda sintonía con el ordenamiento nacional[4] al establecer que éste entrará en vigor el primer día del segundo mes contado a partir de la última notificación en la que una de las Partes comunique a la otra, por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus ordenamientos jurídicos internos para tal efecto (art. 24), que por el lado peruano no es otro más que el procedimiento de perfeccionamiento interno.

45. Una vez que el Tratado cobre vigencia, pasará a formar parte, *ipso facto*, del derecho peruano, tal como lo establece el artículo 55° de la Constitución Política[5] y el artículo 3 de la Ley N° 26647[6].

[4] Capítulo II "De los Tratados", artículos 55 al 57, del Título II "Del Estado y la Nación" de la Constitución Política. El referido capítulo fue desarrollado por la Ley N° 26647, Ley que regula los actos relativos al Perfeccionamiento Nacional de los Tratados.

[5] Constitución Política, art. 55°: *"Los tratados celebrados por el Estado y en vigor, forman parte del derecho nacional"*.

[6] Ley N° 26647, art. 3: *"Los Tratados celebrados y perfeccionados por el Estado Peruano entran en vigencia y se incorporan al derecho nacional, en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales respectivos, de acuerdo al artículo precedente"*.

46. Asimismo, se incluye un artículo relativo a las enmiendas al Tratado, precisándose que cualquier enmienda debe ser formulada por escrito y acordada por mutuo consentimiento entre las Partes, la cual entrará en vigor de conformidad con el artículo 24 antes reseñado.

47. El Tratado tendrá una duración indeterminada (art. 23); sin embargo, se incluye un acápite relativo a la denuncia, en el que se contempla que cualquiera de las Partes podrá notificar de manera escrita y por la vía diplomática a la otra Parte, su intención de ponerle término. La denuncia se hará efectiva el primer día del sexto mes a partir de la fecha de recepción de dicha notificación (art. 25, num. 1).

48. Las Partes acordaron que la eventual denuncia del Tratado no afectará las solicitudes de extradición presentadas antes de que la misma surta efectos, debiendo regirse dichas solicitudes por las disposiciones del Tratado (art. 25, num. 2).

49. Finalmente, es necesario señalar que las Partes acordaron que el Tratado se aplique a todas las solicitudes de extradición presentadas con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando los delitos a los que se refieran hayan sido cometidos con anterioridad (art. 21).

V. CALIFICACIÓN

50. Con relación a la naturaleza jurídica del Tratado, debe precisarse que dicho instrumento reúne los elementos señalados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969[7] para calificar como 'tratado'[8]. En la misma perspectiva, el Tratado cumple con la triple exigencia utilizada por la doctrina[9] para distinguir a los tratados de otra clase de acuerdos carentes de efectos jurídicos.

51. Esta caracterización es importante resaltarla, dado que sólo aquellos instrumentos calificados como tratado son sometidos al perfeccionamiento interno en el derecho peruano.

VI. OPINIONES TÉCNICAS

52. A efectos de sustentar el presente informe, se tomó en cuenta las opiniones emitidas por la Comisión Intersectorial y de la Dirección General de América del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comisión Intersectorial

53. Con memorándum LEG00842/2019 del 13 de junio de 2019, la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el informe N° 007/2019 de la *Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana y conducir la negociación de Proyectos de tratados a celebrarse con otros*

REPÚBLICA DEL PERÚ - Dirección General de Tratados - F.L.D.F. - Ministerio de Relaciones Exteriores -

---

[7] La Convención de Viena de 1969 fue ratificada internamente mediante Decreto Supremo N° 029-2000-RE del 14 de setiembre de 2000, la misma que se encuentra vigente para nuestro país desde el 14 de octubre de 2000.

[8] Art. 2: *"1. Para los efectos de la presente Convención: (a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. (...)".*

[9] Para que los instrumentos internacionales sean considerados como "tratados", estos deben: (a) ser imputables a sujetos de Derecho internacional, como son en este caso los Estados; (b) originar derechos y obligaciones de carácter jurídico entre las Partes; y, (c) su marco regulador debe ser el Derecho Internacional Público. Cfr. Remiro Brotóns, Antonio et al., Derecho Internacional, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 184.

Estados sobre asuntos de Derecho Penal Internacional', el cual contiene la evaluación sustantiva del Tratado.

54. En dicho informe se desarrolla con detalle las disposiciones del Tratado concluyendo que este se encuentra conforme a la legislación procesal penal peruana vigente y no genera obligaciones financieras para el Estado peruano.

55. En cuanto a los beneficios y ventajas que incorpora la aprobación del Tratado, se señala que el mismo coadyuvará a reforzar, mejorar y agilizar la cooperación mutua en materia de extradición entre el Perú y República Dominicana, haciendo más expeditivo dicho procedimiento.

56. Asimismo, permitirá predictibilidad en el trámite, ya que establece los requisitos y causales de denegatoria de los pedidos de extradición, así como también brinda un marco de garantías mínimas para el extraditable y los Estados, conforme al Principio de Especialidad, permitiendo así, que la entrega de personas reclamadas se realice conforme al derecho internacional, respetando el derecho interno.

57. Finalmente, el citado informe considera que el Tratado será una herramienta eficaz en la lucha y prevención contra la delincuencia, de lo que se desprende la conveniencia para los intereses nacionales de su celebración.

Dirección de Centroamérica y el Caribe

58. Mediante memorándum CCA00022/2019 del 27 de marzo de 2018, la Dirección de Centroamérica y el Caribe alcanzó su opinión con relación a las ventajas y beneficios, desde el punto de vista de la política exterior peruana, particularmente en la relación bilateral con República Dominicana, de la entrada en vigencia del Tratado.

59. Dicha Dirección resaltó que el Tratado permitirá fortalecer la colaboración con la República Dominicana, lo cual redundará en el fortalecimiento de la relación bilateral.

60. Asimismo, resaltó la importancia de los instrumentos internacionales que coadyuvan a la lucha contra la criminalidad, la impunidad y la desigualdad, como lo son los tratados de extradición, toda vez que tales instrumentos internacionales permiten impedir que personas que cometieron uno o varios delitos en una determinada jurisdicción se trasladen a otra para evitar ser juzgados por las acciones que llevaron a cabo.

61. En esa perspectiva, en la lucha contra la corrupción en la que se encuentra el Perú, tanto en el plano nacional como internacional, el empleo de tratados de extradición resulta fundamental.

62. Por tales consideraciones, dicha Dirección opinó positivamente para la ratificación del Tratado.

VII. VIA DE PERFECCIONAMIENTO

63. Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que el **"Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana"**, no colisiona con norma constitucional alguna.

64. En lo que respecta a la vía de perfeccionamiento interno, a criterio de la Dirección General de Tratados, el Tratado se enmarca en los supuestos de derechos humanos y soberanía, previstos en los numerales 1 y 2, respectivamente, del artículo 56° de la Constitución Política del Perú.

65. La vinculación con los derechos humanos radica en la propia naturaleza del esquema de extradición que se busca establecer, ya que al centrarse en el ámbito penal, ésta se enmarca en el respeto de las garantías y los derechos fundamentales de las personas y el derecho al debido proceso, ampliamente consagrados en las legislaciones nacionales y tratados de derechos humanos.

66. Esta relación es clara si se tiene presente que en el Libro Séptimo *"La Cooperación Judicial Internacional"* del nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 957, se precisa como una de las fuentes de la cooperación judicial internacional la conforman los tratados celebrados por el Perú, en un marco de respeto de los derechos humanos[10]

67. El supuesto de soberanía está dado por el propio esquema de extradición que se busca establecer, pues éste gira en torno al *ius puniendi*, potestad soberana para hacer efectivo el derecho penal del Estado.

68. Para comprender mejor dicha relación, debe tenerse en consideración que el Tratado es una herramienta que permitirá el juzgamiento de personas procesadas o la ejecución de condenas ya dictadas en sus respectivos territorios, a través de la coordinación entre las autoridades competentes en materia de extradición entre los Estados Contratantes, dado que el *ius puniendi* se encuentra circunscrito a su propio territorio. De ahí que la extradición se califique como activa, desde la perspectiva del Estado que solicite la extradición conforme al Tratado; o pasiva, en la del Estado que recibe la solicitud de extradición.

69. En consecuencia, se concluye que la vía que corresponde para el perfeccionamiento interno del **"Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana"**, es la dispuesta en el artículo 56° de la Constitución Política del Perú y en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley N° 26647, Ley que regula los actos relativos al Perfeccionamiento Nacional de los Tratados; correspondiendo que el mencionado instrumento internacional sea, en primer término, aprobado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa y luego ratificado internamente por el Presidente de la República mediante decreto supremo.

Lima, 20 de agosto de 2019

REPÚBLICA DEL PERU - Dirección General de Tratados - Ministerio de Relaciones Exteriores

Franca Lorella Deza Ferreccio
Embajadora
Directora General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERU - Dirección General de Tratados - V.B. I.A.A.V. - Ministerio de Relaciones Exteriores

PGLD/REJBB

[10] Decreto Legislativo Nº 957, art. 508: *"Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con la Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial internacional se rigen por los tratados internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos humanos"* (énfasis agregado).

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DOMINICANA

La República del Perú y la República Dominicana, en adelante "Las Partes";

Animadas por el deseo de fortalecer los vínculos de amistad que existen entre sus pueblos y Gobiernos;

Conscientes de la importancia de poder contar con los instrumentos que les permitan reforzar sus capacidades comunes en la lucha y la prevención contra la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones, particularmente en materia de delincuencia transnacional organizada y terrorismo;

Convencidos de que la extradición es una de las herramientas de mayor relevancia en el marco jurídico internacional para el éxito de la lucha contra la delincuencia internacional.

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBLIGACIÓN DE EXTRADITAR

Las Partes convienen en extraditar recíprocamente, de acuerdo a las disposiciones del presente Tratado, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas por las autoridades judiciales de la Parte Requirente por un delito que dé lugar a la extradición.

ARTÍCULO 2
DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN

1. Darán lugar a extradición, los hechos punibles que tengan prevista una pena privativa de libertad u otra clase de pena o medida de seguridad igual o superior a los dos años, conforme a la legislación de ambas Partes.

2. Si la extradición fuera solicitada para la ejecución de una condena, la duración de la pena privativa de libertad u otra clase de pena o medida de seguridad que le reste por cumplir a la persona requerida deberá ser de seis (6) meses o más.

3. La extradición procederá, aun cuando la calificación y sanción de los hechos u omisiones que sirvan para sustentarla, no resulten recíprocamente idénticas entre los Sistemas Jurídicos de las dos Partes.

REPÚBLICA DEL PERÚ - Dirección General de Tratados - Ministerio de Relaciones Exteriores - V.°B.°

4. Si la solicitud de extradición se refiere a varios delitos punibles conforme a la legislación de Las Partes, pero algunos no cumplen las condiciones previstas en los párrafos 1 y 2, la Parte Requerida podrá conceder la extradición para el procesamiento o sanción de la totalidad de esos delitos.

5. En materia tributaria y aduanera, la extradición no podrá denegarse porque la legislación de la Parte Requerida no establezca el mismo tipo de impuestos o de tasas, o no contenga el mismo tipo de reglamentación que la legislación de la Parte Requirente, si los hechos reúnen los requisitos del presente artículo.

ARTÍCULO 3
CAUSALES QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA DENEGACIÓN DE LA EXTRADICIÓN

La extradición no será concedida cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si la Parte Requerida estima que la ejecución de la solicitud de extradición pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de su país;

b) Si la petición se refiere a delitos considerados por la Parte Requerida como delitos políticos o previstos en la legislación militar que no estén tipificados en la legislación penal ordinaria. No se considerará delito político el delito de terrorismo o los conexos al mismo;

c) Si la Parte Requerida tiene motivos fundados para considerar que la solicitud de extradición se ha formulado con miras a procesar o castigar a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, o que la situación de esa persona puede resultar perjudicada por alguna de esas razones;

d) Si la sentencia que motiva la solicitud de extradición ha sido dictada en ausencia o contumacia y la Parte Requirente no otorga las seguridades de que el caso se reabrirá para oír al procesado y permitirle el ejercicio del derecho de defensa que le dé la posibilidad de obtener una nueva sentencia.

e) Si la persona reclamada hubiere sido condenada o debiera ser juzgada en la Parte Requirente por un tribunal de excepción;

f) Si la persona ha sido condenada o absuelta definitivamente, o beneficiada por una amnistía, indulto o conmutación de pena en el territorio de la Parte Requerida o en un tercer Estado, respecto del delito o delitos en los que se fundamenta la solicitud de extradición; y,

REPÚBLICA DEL PERÚ - Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General de Tratados - V.A.A.V.

g) Si la acción penal o la pena se encuentran prescritas, de conformidad con la legislación de la Parte Requirente.

h) Cuando hubiere un proceso penal en trámite o archivado provisoriamente en el territorio de la Parte Requerida respecto de la persona reclamada, por los mismos hechos en que se funda la solicitud de extradición;

i) Cuando la Parte Requerida considere que la extradición pudiere deducir en perjuicio de la persona reclamada, consecuencias de una gravedad excepcional, desde el punto de vista humanitario, en razón de su edad o su estado de salud.

ARTÍCULO 4
ENTREGA DE NACIONALES

No se denegará la extradición ni la entrega por razón que el reclamado sea nacional de la Parte Requerida.

ARTÍCULO 5
PENA DE MUERTE

La extradición será denegada si el delito por el que se solicita tuviere prevista la pena de muerte en la legislación de la Parte Requirente, salvo que esta otorgue garantías suficientes de que dicha pena no se requerirá, no se dictará, ni se ejecutará.

ARTÍCULO 6
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. La solicitud de extradición será formulada en todos los casos por escrito y remitida por vía diplomática.

2. La solicitud de extradición deberá contener lo siguiente:

a) Los documentos, declaraciones u otro tipo de información que permitan determinar la identidad y el probable paradero de la persona reclamada;
b) La exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición, haciendo mención de la fecha y el lugar en que se cometieron, su calificación jurídica y las referencias a las disposiciones legales aplicables a estos, incluidas aquellas relativas a la prescripción;
c) El texto de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición, y las penas correspondientes;

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
I.A.A.V.
Ministerio de Relaciones Exteriores

d) El razonamiento jurídico que indique, según el caso, por qué la acción penal o la ejecución de la pena no ha prescrito; y,
e) Los documentos, declaraciones u otro tipo de información especificada en el párrafo 3 o 4 de este artículo, según corresponda.

3. La solicitud de extradición que se refiera a una persona reclamada para ser procesada por un delito, deberá también ir acompañada del original o de la copia de la orden de detención dictada por autoridad judicial competente. Igualmente debe contener la prueba necesaria que establezca indicios suficientes de la comisión del hecho delictuoso y de la participación de la persona reclamada en los hechos u omisiones penales que se le imputan a la persona reclamada.

4. Si la solicitud de extradición se refiere a una persona condenada, la solicitud deberá también ir acompañada de:

a) Un ejemplar certificado del fallo condenatorio.
b) La declaración de la autoridad competente mediante la cual establezca la duración de la pena privativa de libertad a la que será concretamente sometida la persona reclamada.

5. Si la Parte Requerida solicita, en aplicación del presente Tratado, información o documentos adicionales para decidir acerca del curso que dará a la solicitud de extradición, dicha información o documentos deberán presentarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días consecutivos.

ARTÍCULO 7
DETENCIÓN PREVENTIVA

1. La Parte Requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por vía diplomática, o directamente entre el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación de la República del Perú y la Procuraduría General de la República Dominicana.

2. La solicitud de detención preventiva se presentará por escrito y contendrá:

a) Una descripción de la persona reclamada;
b) El paradero de la misma, si se conociere;
c) Una breve exposición de los hechos relevantes al caso, mencionando la fecha, el lugar y las circunstancias en que se cometió el delito;
d) El detalle de la ley o leyes infringidas;
e) La declaración de la existencia de una orden de detención o de fallo condenatorio contra la persona reclamada; y,
f) Una declaración indicando que la solicitud de extradición se presentará posteriormente.

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores
V.A.V.

3. A la recepción de la solicitud de detención preventiva, la Parte Requerida le dará trámite de conformidad con su legislación. La Parte Requirente será notificada al más breve plazo, del trámite respectivo.

4. La persona detenida preventivamente será puesta en libertad si la Parte Requerida, vencido el plazo de sesenta (60) días consecutivos a partir de la fecha en que ocurrió la detención de la persona reclamada, no hubiera recibido la solicitud de extradición en los términos estipulados en el presente Tratado.

5. La puesta en libertad de la persona reclamada en virtud del párrafo 4 de este artículo, no impedirá que sea nuevamente detenida y su extradición concedida en caso se reciba posteriormente la correspondiente solicitud.

ARTÍCULO 8
DECISIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y ENTREGA DE LA PERSONA RECLAMADA

1. La Parte Requerida tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Tratado y supletoriamente de conformidad con las reglas procedimentales de su derecho interno y comunicará sin demora a la Parte Requirente, por la vía diplomática, la decisión que adopte respecto a tal solicitud.

2. Si se concede la extradición, Las Partes convendrán la fecha y el lugar para la entrega de la persona reclamada. La Parte Requerida certificará a la Parte Requirente la duración de la detención sufrida por la persona reclamada con motivo de su extradición. La Parte Requirente computará dicho plazo de detención y lo deducirá de la condena a pena privativa de libertad a la que la persona extraditada debiere ser sometida.

3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 4 del presente artículo, si la persona reclamada no es recibida en un plazo de cuarenta y cinco (45) días consecutivos contados a partir de la fecha convenida para la entrega, esta será puesta en libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente denegar su extradición por los mismos hechos.

4. En caso de fuerza mayor que impidiera la entrega o la recepción de la persona por extraditar, la Parte afectada informará a la otra Parte. Ambas Partes acordarán una nueva fecha para la entrega, siendo aplicables las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo.

5. Si la extradición fuere denegada, la Parte Requerida informará de ello a la Parte Requirente -y si hubiere lugar, le suministrará copia de la decisión pronunciada en ese sentido por la autoridad competente.

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
V.A.V.
Ministerio de Relaciones Exteriores

ARTÍCULO 9
ENTREGA DIFERIDA O TEMPORAL

1. Después de haber aceptado la extradición, la Parte Requerida podrá diferir la entrega de la persona reclamada, hasta la conclusión del procesamiento penal o hasta el cumplimiento de la condena a que esa persona se encontrare sometida en el territorio de la Parte Requerida. La Parte Requerida informará de tal circunstancia a la Parte Requirente, a la brevedad posible, a efecto de que ambas Partes puedan coordinar oportunamente la fecha y lugar de la ejecución concreta de la extradición.

2. Si se concede la extradición de una persona sometida a procesamiento penal o al cumplimiento de una condena en el territorio de la Parte Requerida, esta podrá, en casos excepcionales, entregarla temporalmente, a la Parte Requirente a condición de que la persona extraditada le sea devuelta en los términos particularmente acordados por ambas Partes, para el caso.

ARTÍCULO 10
CONCURRENCIA DE SOLICITUDES

Si la Parte Requerida recibiera, de manera concurrente, solicitudes de la Parte Requirente y de cualquier otro Estado o Estados para la extradición de la misma persona, sea por el mismo delito o por delitos distintos, la Parte Requerida determinará soberanamente a cuál Estado entregará en extradición esa persona. La Parte Requerida al tomar su decisión ponderará entre otros factores los siguientes:

a) Si las solicitudes fueron realizadas con arreglo a un instrumento jurídico internacional vinculante;
b) El orden cronológico en el que las solicitudes fueron recibidas por la Parte Requerida;
c) El lugar donde se cometió cada delito;
d) El lugar donde se encuentre la víctima;
e) La gravedad de cada delito;
f) La nacionalidad y el domicilio de la persona reclamada; y,
g) La posibilidad de una extradición ulterior hacia otro Estado.

ARTÍCULO 11
INCAUTACIÓN Y ENTREGA DE BIENES

1. Dentro de las limitaciones establecidas en la legislación de la Parte Requerida, esta podrá incautar y entregar a la Parte Requirente, los objetos, documentos e información probatoria concernientes al delito en atención al cual se concede la extradición.

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores
A.A.V.

2. La Parte Requerida podrá aplazar la entrega de los bienes indicados en el párrafo anterior, por el tiempo que considere necesario para una investigación o un proceso penal que se esté llevando a cabo en su propio territorio. De manera diferente, podrá entregarlos a la Parte Requirente, a condición que le sean devueltos a la brevedad posible.

3. La incautación de bienes se hará siempre bajo reserva de los derechos de la Parte Requerida y/o de los terceros adquirientes de buena fe de esos bienes.

ARTÍCULO 12
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

1. La persona extraditada conforme al presente Tratado no podrá ser procesada, juzgada ni detenida en la Parte Requirente, ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad individual por cualquier hecho anterior a la entrega, salvo en los casos siguientes:

a) Cuando la Parte que la ha entregado da su consentimiento. Para tal fin, se presentará una solicitud acompañada de los documentos previstos en el artículo 6 y un acta judicial donde se consignen las declaraciones de la persona extraditada, precisando si acepta la extensión de la extradición o si se opone a ella. Dicho consentimiento sólo podrá ser otorgado cuando el delito por el cual se solicita da lugar a la extradición de conformidad con el presente Tratado; o,

b) Cuando la persona extraditada, encontrándose en la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte a la que fue entregada, no lo ha hecho dentro del plazo de treinta (30) días consecutivos posteriores a su liberación definitiva o si retornara voluntariamente a dicho territorio después de haberlo abandonado.

2. Cuando la calificación legal del delito por el cual una persona ha sido extraditada se modifica en el curso del procedimiento, sólo podrá ser procesada o juzgada si la nueva calificación:

a) Puede dar lugar a la extradición en las condiciones del presente Tratado;

b) Se refiere a los mismos hechos por los cuales se concedió la extradición; y,

c) No se castiga con la pena de muerte en el Estado Requirente, salvo que otorgue las garantías previstas en el artículo 5 del presente Tratado.

REPÚBLICA DEL PERÚ - Dirección General de Tratados - Ministerio de Relaciones Exteriores - A.A.V.

ARTÍCULO 13
REEXTRADICIÓN A UN TERCER ESTADO

Salvo en el caso previsto en el artículo 12, párrafo 1, apartado b), la reextradición a un tercer Estado no podrá concederse sin el consentimiento del Estado Requerido que haya concedido la extradición. Dicho Estado podrá exigir la presentación de los documentos previstos en el artículo 6, así como un acta judicial en la que conste que la persona reclamada acepta la reextradición o que se opone a ella.

ARTÍCULO 14
CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA RECLAMADA

Si la persona reclamada consiente en ser entregada a la Parte Requirente, la Parte Requerida, conforme a su legislación interna, resolverá su entrega a la brevedad posible. El consentimiento deberá ser libre, expreso y voluntario, a cuyo efecto la persona reclamada deberá haber sido previamente informada de sus derechos y de las consecuencias de su decisión.

ARTÍCULO 15
TRÁNSITO

1. La Parte Requerida autorizará a la Parte Requirente, el tránsito por su territorio de las personas que les hayan sido entregadas en extradición, por terceros Estados.

2. La solicitud de tránsito puede ser transmitida por la vía diplomática, directamente entre el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación de la República del Perú y la Procuraduría General de la República Dominicana o por cualquier otra vía pertinente.

3. La solicitud de tránsito contendrá una descripción de la persona transportada y un breve resumen de los hechos objeto de extradición, copia de la resolución por la que se concedió la extradición, así como la descripción física del extraditable en tránsito y el nombre de los custodios.

4.Una persona extraditada en tránsito debe ser mantenida en el territorio de la Parte Requerida, el tiempo que dure el período de tránsito; a ese efecto, las autoridades de aplicación de la legislación interna de la Parte Requerida prestarán toda la colaboración y asistencia a los agentes bajo cuya custodia esté siendo trasladada la persona.

5. La autorización para transitar no se requerirá cuando la Parte que traslada a la persona extraditada utiliza transporte aéreo y no tiene la necesidad de aterrizar en el territorio de la otra Parte.

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores
V.A.V.

6. Si ocurriera un aterrizaje no programado, la Parte en cuyo territorio ocurre ese aterrizaje no programado puede requerir una solicitud de tránsito de conformidad con el párrafo 1 de este artículo, y puede mantener en estado de detención bajo su custodia a la persona transportada hasta que se reciba la solicitud de tránsito y el traslado continúe. Esta solicitud debe ser planteada en el término de hasta las noventa y seis (96) horas siguientes al aterrizaje no programado.

ARTÍCULO 16
IDIOMA Y EXENCIÓN DE FORMALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

1. Todos los documentos presentados por la Parte Requirente deberán hallarse escritos en idioma español.

2. En aplicación de las disposiciones del presente Tratado, la solicitud de extradición, así como los documentos de cualquier naturaleza que la sustenten al momento de su introducción o que la complemente posteriormente, estarán exentos de legalización o formalidad análoga.

ARTÍCULO 17
GASTOS

1. Los gastos ocasionados por los procedimientos internos inherentes a la extradición estarán a cargo de la Parte Requerida, con excepción de los relativos al transporte de la persona extraditada hacia el territorio de la Parte Requirente; erogaciones estas que deberán ser cubiertas por este último.

2. Si, durante la ejecución de una solicitud de extradición, se pusiera de manifiesto que es necesario incurrir en gastos extraordinarios para cumplir con dicha solicitud, Las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones a los cuales se sujetará la ejecución de la solicitud.

ARTÍCULO 18
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

Las disposiciones del presente Tratado no afectarán los derechos ni las obligaciones a los que, previo a la conclusión del presente Tratado, hayan contraído las Partes en otros instrumentos jurídicos internacionales.

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
I.J.A.V.
Ministerio de Relaciones Exteriores

ARTÍCULO 19
AUTORIDADES CENTRALES

1. Para los efectos del presente Tratado, la Autoridad Central es, respecto de la República del Perú, el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, y respecto de la República Dominicana, la Procuraduría General de la República.

2. La Autoridad Central de la Parte Requirente es la que tramitará vía diplomática, las solicitudes de extradición conforme estipula el presente Tratado.

3. Las Autoridades Centrales de ambas Partes se comunicarán directamente entre sí.

4. Las Autoridades Centrales podrán consultarse mutuamente, con relación a la tramitación de los casos, al mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos para la implementación del presente Tratado.

5. Cualquier modificación que afecte a la designación de una Autoridad Central se pondrá en conocimiento de la otra Parte por vía diplomática.

ARTÍCULO 20
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja entre Las Partes, relacionada con la interpretación o la ejecución del presente Tratado, será resuelta mediante consultas entre ellas, por vía diplomática.

ARTÍCULO 21
APLICACIÓN TEMPORAL

El presente Tratado se aplicará a todas las solicitudes de extradición presentadas con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando los delitos a los que se refieran hayan sido cometidos con anterioridad.

ARTÍCULO 22
ENMIENDAS

Cualquier enmienda al presente Tratado deberá ser formulada por escrito y acordada sobre la base del mutuo consentimiento de Las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el artículo 24 del Tratado.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
M.A.V.
Ministerio de Relaciones Exteriores

ARTÍCULO 23
DURACIÓN

El presente Tratado tendrá una duración indeterminada.

ARTÍCULO 24
ENTRADA EN VIGOR

El presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes contado a partir de la última notificación a través de las cuales Las Partes se comuniquen mutuamente, por vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos para tal efecto.

ARTÍCULO 25
DENUNCIA

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado en cualquier momento mediante notificación escrita a la otra Parte por la vía diplomática. En este caso, la denuncia surtirá efecto el primer día del sexto mes a partir de la fecha de recepción de dicha notificación.

2. Las solicitudes de extradición que hayan sido recibidas antes de la fecha en que la denuncia del presente Tratado surta efecto, continuarán rigiéndose, no obstante, por las disposiciones del mismo.

SUSCRITO en Lima, el 18 de marzo de 2019, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos y válidos.

POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ

POR LA REPÚBLICA DOMINICANA

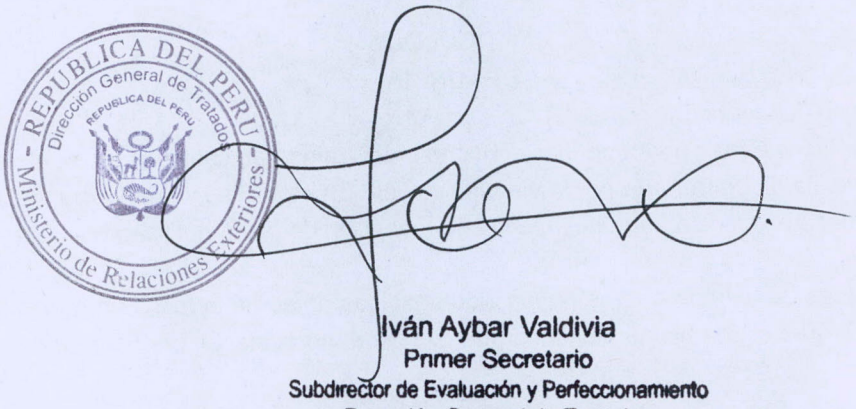
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS

Se autentica el presente documento, que es

"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Que se conserva en el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", registrado con el código BI.DO.02.2019 y que consta de 11 páginas.

Lima, 24/07/2019



Iván Aybar Valdivia
Primer Secretario
Subdirector de Evaluación y Perfeccionamiento
Dirección General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 24/07/19 03:02 PM

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MEMORÁNDUM (CCA) N° CCA00019/2019

A	:	DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De	:	DIRECCIÓN DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Asunto	:	Solicita iniciar perfeccionamiento interno del Tratado de Extradición con República Dominicana

---

Como es de conocimiento de ese Superior Despacho, el lunes 18 de los corrientes el señor Canciller, Embajador Néstor Popolizio Bardales, participó en la III Reunión del Mecanismo de Consultas Diplomáticas Perú-República Dominicana, la misma que tuvo lugar en esta ciudad. En el marco de dicha Reunión, se suscribió el Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana.

Se remite a esa Dirección General dicho acuerdo para dar inicio al proceso de perfeccionamiento interno, así como las carpetas de tratado facilitadas para la referida Reunión.

Lima, 19 de marzo del 2019

Patricia Yolanda Ráez Portocarrero
Ministra
Directora de Centroamérica y el Caribe

C.C: LEG
JGBQ

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 24/07/19 03:02 PM

Anexos

Proveidos

Proveido de Patricia Yolanda Ráez Portocarrero (19/03/2019 15:55:03)
Derivado a Jorge Alejandro Raffo Carbajal
Pendiente inicial.
Proveido de Fiorella Nalvarte (19/03/2019 16:19:53)
Derivado a Pablo Andrés Moscoso de la Cuba, Iván Adolfo Aybar Valdivia, Ramón Edgardo José Bahamonde Bachet, Patricia Giuliana Linares Delgado

Estimados funcionarios por indicación del Embajador Raffo, pase a REA para registro y archivo y a EPT para perfeccionamiento. Srta. Linares favor pase para vuestra atención el IP.
Proveido de Elmer López Chirinos (19/03/2019 16:34:50)
Derivado a Lisette Stefany Pérez Fuentes
Dra Pérez Apreciare proyectar informe de la Comisión para remitirlo a DGT. Gracias
Proveido de Pablo Andrés Moscoso de la Cuba (20/03/2019 16:07:51)
Derivado a Luisa Milagros Huanqui Pizarro
Estimada Milagros, por favor atender lo referido a las carpetas devueltas.
Proveido de Pablo Andrés Moscoso de la Cuba (20/03/2019 16:08:43)
Derivado a Marco Antonio Moscoso Calvo, os00019192018rea03
Estimado Marco, por favor digitalizar y remitir a Ana Vergara, a efectos del análisis legal previo al registro y archivo.

Este documento ha sido impreso por Fiorella Nalvarte, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/06/19 05:15 PM

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MEMORÁNDUM (LEG) N° LEG00842/2019

A	:	DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De	:	OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Asunto	:	Se solicita el perfeccionamiento interno del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana
Referencia	:	Memorándum (DGT) Nº DGT00467/2019

---

[1] En atención al Memorándum (DGT) Nº DGT00467/2019, de fecha 21 de marzo de 2019, se hace llegar el Informe Técnico Legal N° 007/2019, emitido por la Comisión *Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre Asuntos de Derecho Penal Internacional* relativo al **"Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana"**.

[2] En tal, se solicita amablemente a esa Dirección General, se inicien los trámites tendientes al procedimiento de perfeccionamiento interno del instrumento internacional en mención.

[3] Se acompaña al presente, copia escaneada del referido Informe, el mismo que le será alcanzado en físico.

Lima, 13 de junio del 2019

Ana Teresa Revilla Vergara
Jefa de la Oficina General de Asuntos Legales

C.C: CCA,DGT,DGA
LSPF

Este documento ha sido impreso por Fiorella Nalvarte, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/06/19 05:15 PM

Anexos

Informe Nº 007-2019.pdf

Proveidos

Proveido de Ana Teresa Revilla Vergara (13/06/2019 18:07:02)
Derivado a Ana Teresa Revilla Vergara

Pendiente inicial.
Proveido de Fiorella Nalvarte (13/06/2019 18:59:38)
Derivado a Iván Adolfo Aybar Valdivia, Ramón Edgardo José Bahamonde Bachet, Patricia Giuliana Linares Delgado
Estimados funcionarios por indicación de la Dra. Revilla pase para vuestro conocimiento y fines.

INFORME DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PERMANENTE ENCARGADA DE EXAMINAR, PREPARAR LA POSICIÓN PERUANA, CONDUCIR LA NEGOCIACIÓN DE PROYECTOS DE TRATADOS SOBRE ASUNTOS DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL

INFORME N° 007/2019

La Comisión Intersectorial Permanente encargada de preparar la posición peruana y negociar los tratados de Derecho Penal Internacional, emite el presente informe respecto del "Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana", para fines del procedimiento de perfeccionamiento interno del referido Tratado.

COMISIÓN INTERSECTORIAL:

[1] Mediante Resolución Suprema N° 0473/RE, de fecha 5 de octubre de 1990, se creó la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre Asuntos de Derecho Penal Internacional.

[2] La citada Comisión Intersectorial se encuentra integrada por los representantes del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Tratados y la Oficina General de Asuntos Legales, que a su vez la preside.

ANTECEDENTES Y PROCESO DE NEGOCIACIÓN

[3] Las negociaciones tendientes a lograr el texto final del proyecto de Tratado sobre Extradición con la República Dominicana, datan del año 2009, siendo el principal problema, armonizar la legislación interna de ambas Partes.

[4] En ese sentido, a través de la Nota RE (DGL/CJE) N° 6-30/13, de fecha 27 abril de 2009, se hizo llegar a las autoridades dominicanas, un proyecto de Tratado de Extradición, para su consideración. Posteriormente, con Nota RE (DGL/CJE) N° 6-30/18, de fecha 15 de mayo de 2009, se alcanzó a las autoridades dominicanas, una nueva versión del citado proyecto de Tratado.

[5] Asimismo, y habiendo transcurrido 5 años sin obtener respuesta por parte de las autoridades dominicanas, en mes de agosto de 2014, se alcanzó un nuevo proyecto de Tratado de Extradición, el cual fue aprobado en el mes de noviembre de 2013 por la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre asuntos de Derecho Penal Internacional.

[6] En agosto del año 2015, la Parte dominicana remitió las modificaciones realizadas a la propuesta peruana, la cual fue sometida a consideración de los miembros de la Comisión Intersectorial Permanente.

[7] En el año 2017, se alcanzó a la Parte Dominicana la contrapropuesta peruana al proyecto del tratado de extradición, la cual fue aceptada en el mes de abril por las autoridades dominicanas.

[8] Finalmente, el Tratado fue suscrito el 18 de marzo de 2019, en la ciudad de Lima, por los Cancilleres de la República del Perú y la República Dominicana, en el marco de la III Reunión del Mecanismo de Consultas Diplomáticas Perú entre ambos países.

ANÁLISIS DEL TRATADO DE LA MATERIA

[9] El Tratado Extradición suscrito entre la República del Perú y la República Dominicana, contiene veinticinco (25) artículos, los cuales regulan el procedimiento de extradición.

[10] Así, el Tratado en mención, regula diferentes aspectos propios de dicho procedimiento, los cuales se encuentran orientados a dotar de eficacia al referido instrumento internacional. En

A. RUEDA B.

ese sentido, las disposiciones reguladas por dicho Tratado se refieren a: obligación de extraditar (Artículo 1); delitos que dan lugar a la extradición (Artículo 2); causales que pueden dar lugar a la denegación de la extradición (Artículo 3); entrega de nacionales (Artículo 4); pena de muerte (Artículo 5); solicitud de extradición y documentación requerida (Artículo 6); detención preventiva (Artículo 7); decisión relativa a la solicitud de extradición y entrega de la persona reclamada (Artículo 8); entrega diferida o temporal (Artículo 9); concurrencia de solicitudes (Artículo 10); incautación y entrega de bienes (Artículo 11); principio de especialidad (Artículo 12); reextradición a un tercer Estado (Artículo 13); consentimiento de la persona reclamada (Artículo 14); tránsito (Artículo 15); idioma y exención de formalidad de la documentación (Artículo 16); gastos (Artículo 17); relación con otros instrumentos jurídicos internacionales (Artículo 18); autoridades centrales (Artículo 19); solución de controversias (Artículo 20); aplicación temporal (Artículo 21); enmiendas (Artículo 22); duración (Artículo 23); entrada en vigor (Artículo 24); y denuncia (Artículo 25).

[11] El artículo 1 del Tratado establece la obligación de las Partes de extraditar recíprocamente a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios, que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas por un delito que dé lugar a la extradición.

[12] El artículo 2 del Tratado precisa las características que deberán cumplir los delitos que darán lugar a la extradición como es que tengan una pena privativa de libertad u otra clase de pena o medida de seguridad prevista igual o superior a 2 años, y en los casos de ejecución de condena, que reste por cumplir 6 meses o más. Asimismo, señala que procederá la extradición aun cuando la calificación y sanción de los hechos u omisiones que sirvan para sustentar la extradición no resulten recíprocamente idénticas entre los sistemas jurídicos de las Partes. En caso que la solicitud de extradición se refiere a varios delitos, pero algunos de ellos no cumple las penas anteriores, podrá concederse la extradición para la totalidad de esos delitos. Procederá también la extradición en materia tributaria y aduanera.

[13] El artículo 3 del Tratado asienta las circunstancias en la que no será concedida la extradición como son: si la ejecución de la extradición atenta contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de la Parte Requerida; si la solicitud versa sobre delitos políticos o militar que no estén tipificados en la legislación ordinaria penal; si la solicitud se ha formulado con miras a procesar o castigar a una persona por causa de raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, o que la situación de una persona pueda resultar perjudicada por algunas de esas razones; si la sentencia que motiva la extradición ha sido dictada en ausencia o contumacia y la Parte requirente no otorga las seguridades del que el caso se reabrirá para oír al procesado y permitirle ejercer su derecho de defensa; si la persona reclamada hubiere sido condenada o debiera ser juzgada por un tribunal de excepción, o ha sido condenada o absuelta definitivamente o beneficiada por una amnistía, indulto o conmutación de pena en el territorio de la Parte Requerida o en un tercer Estado; si se encuentran prescritas la acción penal o la pena; si hubiera un proceso penal en trámite o archivado provisionalmente en el territorio de la Parte Requerida de la persona reclamada, por los mismos hechos que se funda la solicitud; si la extradición pudiera deducir en perjuicio de la persona reclamada, consecuencias de una gravedad excepcional, desde el punto de vista humanitario, en razón de su edad o estado de salud.

[14] El artículo 4 del Tratado indica que no se denegará la extradición ni la entrega por razón que el reclamado sea nacional de la Parte Requerida.

[15] El artículo 5 del Tratado señala que será denegada la extradición si el delito por el que se solicita tuviere prevista la pena de muerte en la legislación de la Parte Requirente, salvo que esta otorgue garantías suficientes de que dicha pena no se requerirá, dictará o ejecutará.

[16] El artículo 6 del Tratado regula la forma de la presentación de la solicitud de la extradición y la documentación que deberá acompañar ésta, en tal sentido, se indica que dicha solicitud será formulada por escrito, remitida por la vía diplomática y deberá contener los documentos, declaraciones u otro tipo de información que permitan determinar la identidad y el probable paradero de la persona reclamada; la exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición, haciendo mención de la fecha y el lugar en que se cometieron, su calificación jurídica y las referencias a las disposiciones legales aplicables a estos, incluidas aquellas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
Elvia Barrios Alvarado
Jueza Suprema
Poder Judicial

FISCALÍA DE LA NACIÓN
V°B°
CELIA
LOICCHIA
RUIZ
Cooperación Internacional y Extradiciones

REPÚBLICA DEL PERÚ
Fiscalía General de la Nación
APRV
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina de Cooperación Judicial
E.L.CH.
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
A.T.R.V.
Ministerio de Relaciones Exteriores

PERU
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa
A. RUEDA B.

relativas a la prescripción; el texto de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición, y las penas correspondientes; el razonamiento jurídico que indique, según el caso, por qué la acción penal o la ejecución de la pena no ha prescrito; y, los documentos, declaraciones u otro tipo de información especificada en el párrafo 3 o 4 de este artículo, según corresponda. En el caso de que se refiera a una persona reclamada para ser procesada adicionalmente deberá acompañar el original o copia de la orden de detención y la prueba necesaria que establezca indicios suficientes de la comisión del hecho delictuoso y de la participación de la persona reclamada. Si la solicitud de extradición se refiere a una persona condenada, ésta también deberá acompañar un ejemplar certificado del fallo condenatorio y la declaración de la autoridad competente mediante la cual establezca la duración de la pena privativa de libertad a la que será concretamente sometida la persona reclamada.

Por otro lado establece un plazo máximo de 45 días consecutivos para presentar la información o documentación adicional solicitada por la Parte Requerida.

[17] Por otro lado, en el artículo 6 del Tratado se contempla que la detención preventiva de la persona reclamada podrá ser solicita por la Parte Requirente en tanto se presente la solicitud de extradición. Dicha solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por vía diplomática, o directamente entre el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación de la República del Perú y la Procuraduría General de la República Dominicana por escrito y deberá contener: una descripción de la persona reclamada; el paradero de la misma, si se conociere; una breve exposición de los hechos relevantes al caso, mencionando la fecha, el lugar y las circunstancias en que se cometió el delito; el detalle de la ley o leyes infringidas; la declaración de la existencia de una orden de detención o de fallo condenatorio contra la persona reclamada; y, una declaración indicando que la solicitud de extradición se presentará posteriormente.

Se fija sesenta (60) días consecutivos, contados a partir de la detención de la persona reclamada, como plazo para la presentación de la solicitud de extradición, de no presentarse la misma, la persona reclamada será puesta en libertad, ello no impedirá que sea nuevamente detenida y su extradición concedida en caso se reciba posteriormente la correspondiente solicitud.

[18] El artículo 8 del Tratado dispone que la Parte Requerida tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el procedimiento establecido en el Tratado y supletoriamente de conformidad con las reglas procedimentales de su derecho interno y comunicará sin demora a la Parte Requirente, por la vía diplomática, la decisión que adopte respecto a tal solicitud. En caso se concede la extradición, las Partes convendrán la fecha y el lugar para la entrega de la persona reclamada. La Parte Requerida certificará a la Parte Requirente la duración de la detención sufrida por la persona reclamada con motivo de su extradición. La Parte Requirente computará dicho plazo de detención y lo deducirá de la condena a pena privativa de libertad a la que la persona extraditada debiere ser sometida. Si la persona reclamada no es recibida en un plazo de cuarenta y cinco (45) días consecutivos contados a partir de la fecha convenida para la entrega, esta será puesta en libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente denegar su extradición por los mismos hechos.

En caso de fuerza mayor que impidiera la entrega o la recepción de la persona por extraditar, la Parte afectada informará a la otra Parte, ambas Partes acordarán una nueva fecha para la entrega. Si la extradición fuere denegada, la Parte Requerida informará de ello a la Parte Requirente -y si hubiere lugar, le suministrará copia de la decisión.

[19] El artículo 9 del Tratado, instaura que después de haber aceptado la extradición, la Parte Requerida podrá diferir la entrega de la persona reclamada, hasta la conclusión del procesamiento penal o hasta el cumplimiento de la condena a que esa persona se encontrare sometida en el territorio de la Parte Requerida, por lo que ésta última informará de tal circunstancia a la Parte Requirente, a la brevedad posible, a efecto de que ambas Partes puedan coordinar oportunamente la fecha y lugar de la ejecución concreta de la extradición. En el caso se concede la extradición de una persona sometida a procesamiento penal o al cumplimiento de una condena en el territorio de la Parte Requerida, esta podrá, en casos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
Elvia Barrios Alvarado
Jueza Suprema
Poder Judicial

FISCALÍA DE LA NACIÓN
V°B°
CELIA GOICOCHEA RUIZ
Fiscal de Cooperación Internacional y Extradiciones

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Asuntos Legales
ATRV
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina de Cooperación Judicial
E.L.CH.
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Tratados
ATRV
Ministerio de Relaciones Exteriores

PERÚ
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa
A. RUEDA B.

excepcionales, entregarla temporalmente, a la Parte Requirente a condición de que la persona extraditada le sea devuelta en los términos particularmente acordados por ambas Partes.

[20] El artículo 10 del Tratado señala que si la Parte Requerida recibiera, de manera concurrente, solicitudes de la Parte Requirente y de cualquier otro Estado o Estados para la extradición de la misma persona, sea por el mismo delito o por delitos distintos, la Parte Requerida determinará soberanamente a cuál Estado entregará en extradición esa persona.

[21] El artículo 11 del Tratado, indica que la Parte Requerida podrá incautar y entregar a la Parte Requirente, los objetos, documentos e información probatoria concernientes al delito en atención al cual se concede la extradición, podrá aplazar la entrega de los bienes por el tiempo que considere necesario para una investigación o un proceso penal que se esté llevando a cabo en su propio territorio, asimismo, podrá entregarlos a la Parte Requirente, a condición que le sean devueltos a la brevedad posible. Dicha incautación se hará siempre bajo reserva de los derechos de la Parte Requerida y/o de los terceros adquirientes de buena fe de esos bienes.

[22] El artículo 12 del Tratado estipula que la persona extraditada conforme al presente Tratado no podrá ser procesada, juzgada ni detenida en la Parte Requirente, ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad individual por cualquier hecho anterior a la entrega, salvo en los casos cuando la Parte que la ha entregado da su consentimiento; cuando la persona extraditada, encontrándose en la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte a la que fue entregada, no lo ha hecho dentro del plazo de treinta (30) días consecutivos posteriores a su liberación definitiva o si retornara voluntariamente a dicho territorio después de haberlo abandonado; y cuando la calificación legal del delito por el cual una persona ha sido extraditada se modifica en el curso del procedimiento.

[23] El artículo 13 del Tratado especifica que salvo el artículo 12, párrafo 1, apartado b) del mismo, la reextradición a un tercer Estado no podrá concederse sin el consentimiento del Estado Requerido que haya concedido la extradición. Dicho Estado podrá exigir la presentación de los documentos previstos en el artículo 6, así como un acta judicial en la que conste que la persona reclamada acepta la reextradición o que se opone a ella.

[24] El artículo 14 del Tratado expresa que si la persona reclamada consiente en ser entregada a la Parte Requirente, la Parte Requerida, conforme a su legislación interna, resolverá su entrega a la brevedad posible. El consentimiento deberá ser libre, expreso y voluntario, a cuyo efecto la persona reclamada deberá haber sido previamente informada de sus derechos y de las consecuencias de su decisión.

[25] El artículo 15 del Tratado dispone que la Parte Requerida autorizará a la Parte Requirente, el tránsito por su territorio de las personas que les hayan sido entregadas en extradición, por terceros Estados. Para lo cual, la solicitud de tránsito puede ser transmitida por la vía diplomática, o directamente entre Autoridades Centrales o por cualquier otra vía pertinente. Dicha solicitud deberá contener una descripción de la persona transportada y un breve resumen de los hechos objeto de extradición, copia de la resolución por la que se concedió la extradición, así como la descripción física del extraditable en tránsito y el nombre de los custodios. La persona extraditada en tránsito debe ser mantenida en el territorio de la Parte Requerida, el tiempo que dure el período de tránsito; asimismo, se precisa que en el caso de un aterrizaje no programado, Parte en cuyo territorio ocurre ese aterrizaje podrá requerir una solicitud de tránsito y podrá mantener en estado de detención bajo su custodia a la persona transportada hasta que se reciba la solicitud de tránsito y el traslado continúe. Esta solicitud debe ser planteada en el término de hasta las noventa y seis (96) horas siguientes al aterrizaje no programado.

[26] El artículo 16 del Tratado señala que todos los documentos presentados por la Parte Requirente deberán hallarse escritos en idioma español, y estarán exentos de legalización o formalidad análoga.

[27] El artículo 17 del Tratado establece que los gastos ocasionados por los procedimientos internos inherentes a la extradición estarán a cargo de la Parte Requerida, con excepción de los relativos al transporte de la persona extraditada hacia el territorio de la Parte Requirente;

A. RUEDA B.

erogaciones estas que deberán ser cubiertas por este último. En casos susciten gastos extraordinarios en la ejecución de la extradición las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones a los cuales se sujetará la ejecución.

[28] En el artículo 18 del Tratado se precisa que las disposiciones de éste no afectarán los derechos ni las obligaciones a los que, previo a la conclusión del presente Tratado, hayan contraído las Partes en otros instrumentos jurídicos internacionales.

[29] En el artículo 19 del Tratado se crea la institución de la Autoridad Central, para tal efecto, se designan las autoridades centrales de ambos Estados, en ese sentido, se designa como Autoridad Central de la República del Perú, al Ministerio Público – Fiscalía de la Nación y para la República Dominicana, a la Procuraduría General de la República, las cuales se comunicarán directamente entre sí, asimismo, podrán consultarse mutuamente, con relación a la tramitación de los casos, al mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos para la implementación del Tratado. De darse cualquier modificación que afecte a la designación de una Autoridad Central se pondrá en conocimiento de la otra Parte por vía diplomática.

[30] Finalmente, en el Tratado de la materia se estipulan disposiciones finales relacionadas a la solución de controversias (artículo 20), aplicación temporal (artículo 21), enmiendas (artículo 22), duración (artículo 23), entrada en vigor (artículo 24), y denuncia (artículo 25).

VENTAJAS DE LA RATIFICACIÓN DEL TRATADO

El Tratado suscrito coadyuvará a reforzar, mejorar y agilizar la cooperación mutua en materia de extradición entre la República del Perú y la República Dominicana, haciendo más expeditivo el procedimiento de extradición, convirtiéndose en una herramienta eficaz en la lucha y la prevención contra la delincuencia.

El tratado permitirá la predictibilidad del trámite al establecer cuáles son los requisitos y causales de denegatoria de los pedidos de extradición.

Asimismo, se brinda un marco de garantías mínimas para el extraditable y los Estados, conforme al Principio de Especialidad.

Permite que la entrega de las personas reclamadas se realice conforme al Derecho Internacional respetando el Derecho Interno.

CONCLUSIONES

Como se puede apreciar el Tratado recientemente suscrito por las Partes, además de encontrarse conforme a la legislación procesal penal peruana vigente, resulta ser una herramienta más idónea en la lucha contra la corrupción e impunidad, en el marco de las solicitudes de extradición.

Es menester señalar, que la ejecución del Tratado bajo análisis no genera obligaciones financieras para el Estado peruano.

En atención a ello, la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre Asuntos de Derecho Penal Internacional, emite opinión favorable a la ratificación del instrumento internacional en análisis.

Es todo cuanto se tiene a bien informar para los fines que se estimen pertinentes.

Lima, 04 de junio de 2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
Elvia Barrios Alvarado
Jueza Suprema
Poder Judicial

FISCALÍA DE LA NACIÓN
V°B°
CELIA GOICOCHEA RUIZ
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Asesoría Jurídica
ATRV
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina de Cooperación Judicial
E.L.CH.
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Dirección General de Asuntos Consulares
ATRV
Ministerio de Relaciones Exteriores

PERU
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa

A. RUEDA B.

Ana Teresa Revilla Vergara
Presidenta de la Comisión Intersectorial Permanente encargada de preparar la posición peruana y negociar los tratados de derecho penal internacional

Ana Teresa Revilla Vergara
Directora (e) General de la
Dirección General de Tratados
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Alex M. Rueda Borrero
Director General de Justicia y Libertad
Religiosa
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Celia Goicochea Esther Ruiz
Jefa de la Unidad de Cooperación
Judicial Internacional y
Extradiciones
Ministerio Público

Elvia Barrios Alvarado
Jueza Suprema de la Corte
Suprema de Justicia de la
República- Poder Judicial

Elmer López Chirinos
Secretario Técnico de la Comisión Intersectorial Permanente encargada de preparar la posición peruana y negociar los tratados de derecho penal internacional

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 24/07/19 03:03 PM

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MEMORÁNDUM (CCA) N° CCA00022/2019

A	:	DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De	:	DIRECCIÓN DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Asunto	:	Opinión para el perfeccionamiento interno del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana
Referencia	:	Memorandum DGT004672019

Con relación a su atento Memorándum DGT004672019, se remite a esa Dirección General el informe con la opinión de la Dirección de Centroamérica y el Caribe sobre las ventajas y beneficios, desde el punto de vista de la política exterior peruana, que conllevaría la entrada en vigencia del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Dominicana, suscrito en Lima el 18 de marzo entre los Cancilleres de ambos países.

Lima, 27 de marzo del 2019

Patricia Yolanda Ráez Portocarrero
Ministra
Directora de Centroamérica y el Caribe

JGBQ

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 24/07/19 03:03 PM

Anexos

Opinión sobre las ventajas y beneficios del Tratado de Extradición.docx

Proveidos

Proveido de Patricia Yolanda Ráez Portocarrero (27/03/2019 17:13:05)
Derivado a Jorge Alejandro Raffo Carbajal
Pendiente inicial.
Proveido de Fiorella Nalvarte (27/03/2019 17:14:57)
Derivado a Iván Adolfo Aybar Valdivia, Ramón Edgardo José Bahamonde Bachet, Patricia Giuliana Linares Delgado

Estimados funcionarios por indicación del Embajador Raffo, pase para vuestro conocimiento y fines pertinentes.

Opinión de la Dirección de Centroamérica y el Caribe sobre las ventajas y beneficios, desde el punto de vista de la política exterior peruana, particularmente en la relación bilateral con República Dominicana, de la entrada en vigencia del Tratado de Extradición entre ambos países

La lucha contra el delito es un objetivo primordial de la comunidad internacional, por lo que constituye un elemento importante de la política exterior de los Estados. En ese marco, los instrumentos jurídicos internacionales que permitan enfrentar el delito cobran especial relevancia, destacando los tratados de extradición.

Un tratado de extradición es una herramienta legal de importancia en la lucha contra la criminalidad, la impunidad y la desigualdad, dado que permite impedir que personas que cometieron uno o varios delitos en una determinada jurisdicción se trasladen a otra para evitar ser juzgados por las acciones que llevaron a cabo. En el marco de la lucha contra la corrupción en la que se encuentra empeñado el Gobierno del Perú, tanto en el plano nacional como en el internacional, el empleo de tratados de extradición resulta fundamental.

El Perú ya es signatario de un conjunto de Tratados de Cooperación Jurídica Internacional en materia penal, de los cuales son parte importante los respectivos a extradición. En ese sentido, esta Dirección considera que la entrada en vigencia del Tratado de Extradición con República Dominicana permitiría complementar las herramientas disponibles del Estado peruano para llevar a cabo la lucha contra la corrupción y delitos conexos de manera eficaz y eficiente. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo al artículo 2 del Tratado en cuestión, darán lugar a extradición los hechos punibles que tengan una pena privativa de libertad u otra clase de pena igual o superior a los dos años, con los que se encuentran incluidos una diversidad de delitos que serían materia de extradición.

Asimismo, esta Dirección opina que la entrada en vigencia del Tratado de Extradición con República Dominicana podría sentar un esquema de cooperación bilateral en materia de extradición para futuros casos.

Finalmente, esta Dirección estima que el Tratado de Extradición con República Dominicana fortalecería la colaboración con la República Dominicana en materia judicial, la cual se realiza actualmente en el marco del Acuerdo de Asistencia Judicial en materia Penal y del Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas entre ambos países. De esa manera, el Tratado de Extradición con República Dominicana redundaría en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Por las razones anteriormente señaladas, esta Dirección da su opinión positiva para la ratificación del Tratado de Extradición con República Dominicana.

Lima, 27 de marzo de 2019.